



G. MINISTRO MARIANO RAMIREZ VAZQUEZ.  
C. SRIO. LIC. ENRIQUE CHAN VARGAS.

202

Amparo directo número 6481/962/1a  
SALVADOR RODRIGUEZ Y COAGRAVIADOS.

México, Distrito Federal.- Acuerdo de la Ter-  
cera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-  
ción, del día ocho de julio de mil novecientos sesenta  
y cinco.

Vo. Bo.

VISTO el juicio de amparo directo nú-  
mero seis mil cuatrocientos ochenta y --  
novecientos sesenta y dos, promovido por Salvador --  
Rodríguez y coagraviados, contra actos de la Primo--  
ra Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado  
de Nuevo León, Juez Segundo de Letras de lo Civil --  
de Monterrey, N. L. y Encargado del Registro Público  
de la Propiedad de dicha población, que estimaron --  
violatorios de los artículos 14 y 16 constituciona--  
les, consistentes, respectivamente, en la sentencia -  
definitiva, dictada en el toca a la apelación del --  
juicio ordinario, que siguieron a Ramiro Arizpe, Ar-  
mando Garza González, María Sanjuana Rocha de Garza  
y Rita Ayala de Arizpe; y en su ejecución; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito de fecha dieciocho de --  
mil de mil novecientos sesenta, Tiburcio Silva, --  
Teresa Ortiz Rivera, Gregoria Martínez, Antonio Gay-  
tán, Salvador Rodríguez, Consuelo Banda, Pánfilo Al-  
faro, Antonia Rodríguez, Luisa Silva y Cristina Mar-  
tínez, ante el Juez Segundo de Letras de Monterrey,  
Nuevo León, demandaron a Armando González, Juana Ro-  
cha de González, Ramiro Arizpe y Rita Ayala de Arizpe:

a).- La declaración de que operó la prescripción positiva, respecto del terreno localizado al Sur de dicha población, con los linderos siguientes: al Norte, en ochenta y siete metros, con la calle [REDACTED]; al Sur, en igual medida con la Empresa denominada [REDACTED]; al Oriente y Poniente, en cincuenta y tres metros, cincuenta y cinco centímetros, con la misma Empresa; b).- La cancelación en el Registro Público de la Propiedad, de la inscripción número 119, Volúmen 156, de fecha treinta de enero de mil novecientos sesenta; c).- La inscripción a su favor de dicho inmueble en el mencionado Registro; y, d).- El pago de los gastos y costas del juicio. Como hechos relataron: 1.- En mil novecientos cuarenta, funcionó un Comité Colonizador en Monterrey, con el objeto de colonizar una parte Norte de dicha ciudad, al cual hizo entrega de terrenos que pertenecieron a las Líneas Férreas de México, S. A. de C. V., expropiadas en mil novecientos treinta y siete, y de predios abandonados, baldíos e inhabitables. Así se creó la Colonia Obrerista y el terreno que poseen, al cual le han hecho mejoras. 2.- El terreno mencionado, lo adquirieron del aludido Comité colonizador, a principios de mil novecientos cuarenta, y lo poseen desde esa fecha en concepto de dueños, pacífica, continua y públicamente, y le han hecho las mejoras necesarias para habitarlo. 3.- Mediante Decreto de fecha dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación número treinta y siete, de catorce de febrero de mil novecientos cuarenta y dos, se autorizó el aprovecha-



202

niento de terrenos pertenecientes a los Ferrocarriles Nacionales de México, y según convenio celebrado el veintiséis de abril de mil novecientos sesenta, - entre la Secretaría de Bienes Nacionales, los Ferrocarriles Nacionales de México, y el Gobierno del Estado de Nuevo León, se reconoció la legitimidad de aquellas posesiones, e incluso, mediante Decreto de fecha ocho de diciembre de mil novecientos cincuenta, el Gobierno de Nuevo León, eximió de impuestos a los predios ocupados en esa forma. 4.- Como tienen conocimiento de que los demandados se ostentan propietarios del terreno mencionado, se ven en la necesidad de demandar la prescripción positiva, ya que ha transcurrido el tiempo necesario para adquirirlo por usucapión. Señalaron como aplicables los artículos 790, 807, 1148, 1149, 1151 y 1152 del Código Civil, 90, 91, 92 y 646 del Código de Procedimientos Civiles.

Armando Garza González, María San Juana Rocha de Garza, Ramiro Arizpe Díaz y Rita Ayala de Arizpe, contestaron la demanda en los siguientes términos: a).- Es falso el hecho primero, pues desconocen que haya funcionado el Comité colonizador que se menciona. El terreno que se pretende usucapir, no ha pertenecido a los Ferrocarriles Nacionales, ni ha sido un terreno baldío, ni abandonado. Los actores no poseen el inmueble desde la fecha que indican, - sino que lo ocupan desde hace un año ocho meses, como inquilinos de los anteriores propietarios. Por ese motivo acusaron a los demandados penalmente por el delito de despojo; b).- Es falso el hecho segundo,

pues los demandados no poseen con los requisitos que señalan, sino como inquilinos, y su posesión como -- tal tiene una antigüedad de un año ocho meses, pues en mil novecientos cincuenta y ocho, poseían el inmueble otros inquilinos, y después los fué arrendado a ellos (los actores); c).- Aunque desconocen el contenido de los documentos que exhiben los demandantes, los objetan, porque no tienen relación con este juicio; d).- Es cierto el hecho cuarto, respecto a que los actores les reconocen el carácter de dueños, pero es inexacto que aquellos posean con los requisitos necesarios para usucapir. No son aplicables las disposiciones legales que se invocan. Oponen la defensa de falta de acción.

A la vez, Armando Garza González, María Sanjuana Rocha de Garza, Ramiro Arizpe Díaz y Rita Ayala de Arizpe, reconvinieron: a).- La reivindicación del predio mencionado, con las medidas y linderos siguientes: al Norte, en 87.00 metros, con la calle [REDACTED] al Sur en igual medida con la empresa [REDACTED]; al Oriente en 56.40 con la misma empresa; y al Poniente en 53.55, también con dicha empresa; b).- El pago de los daños y perjuicios causados a razón de ochocientos pesos mensuales; y c).- El pago de los gastos y costas del juicio. Manifestaron: 1.- Con fecha nueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, adquirieron la propiedad del lote mencionado, según lo acreditan con el primer testimonio de la escritura número doscientos treinta y tres, pasada ante la fé del Notario Público





- 5 -

204

D. 6481/62/1a

(34)

licenciado Rubén Leal Isla; inscrita en el Registro -  
Público de la Propiedad el treinta de enero de mil no  
vecientos sesenta, bajo el número 119, Volumen 156, -  
Sección Primera.- 2.- Desde hace aproximadamente un -  
año ocho meses, el lote se encuentra ocupado por Tibur  
cio Silva, Teresa Ortiz Rivera, Gregoria Martínez, --  
Antonio Gaitán, Salvador Rodríguez, Consuelo Banda, -  
Pánfilo Alfaro, Antonio Rodríguez, Luisa Silva y Cris  
tina Martínez, sin consentimiento de sus propietarios,  
y sin derecho alguno. Por ese motivo los acusaron pe-  
nalmente, imputándoles el delito de despojo. 3.- A -  
pesar de las gestiones que extrajudicialmente han rea  
lizado para que los despojantes desocupen el inmueble,  
no lo han logrado, por lo que se ven en la necesidad -  
de demandarlos judicialmente. Son aplicables los ar  
tículos 830, 831, 834 y 838 del Código Civil, y del -  
646 al 653 del Código de Procedimientos Civiles.

Tiburcio Silva, Teresa Ortiz Rivera, Gregoria  
Martínez, Antonio Gaitán, Salvador Rodríguez, Consue  
lo Banda, Pánfilo Alfaro, Antonio Rodríguez, Luisa Sil  
va y Cristina Martínez, contestaron la reconvocción, -  
así: a).- Desde hace aproximadamente veinte años posean  
en concepto de propietarios, pacífica, continua y pú  
blicamente el lote en cuestión, localizado por la ca  
lle [REDACTED] entre las calles de [REDACTED]  
[REDACTED] de la Colonia [REDACTED]  
Dicho inmueble lo adquirieron por entrega que les hizo  
el Comité colonizador de Monterrey, y por tanto ha  
operado la prescripción positiva a su favor. Conse  
cuentemente niegan el hecho primero; b).- Es inexacto

que el mencionado lote lo poseen desde hace aproximadamente un año ocho meses, ya que repiten, su posesión tiene una antigüedad aproximada de veinte años. Además, su posesión es legítima, porque operó en su favor la prescripción positiva. Niegan los hechos a que se refiere la denuncia penal que se formuló en su contra. El reconviniente Ramiro Arizpe se introdujo al domicilio de Salvador Rodríguez y éste se vió precisado a acusarlo ante el Ministerio Público; c).- Es falso el hecho tercero, ya que no se ha realizado ninguna gestión extrajudicial por los reconvinientes, para obtener la desocupación del inmueble; d).- Es falso que tengan el carácter de inquilinos; pero aclaran que si tuvieran ese carácter, la acción reivindicatoria no sería la procedente; e).- Es falso que se causen daños a los reconvinientes; f).- Insisten en los hechos contenidos en la demanda y oponen la defensa de falta de acción, porque el título de propiedad que se exhibe carece de eficacia; pero además, ha operado la usucapión.

El Juez del conocimiento, en doce de abril de mil novecientos sesenta y dos, dictó sentencia con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO.- Se declara improcedente la acción de Prescripción Adquisitiva intentada por los actores señores Tiburcio Silva, Teresa Ortiz Rivera, Gregoria Martínez, Antonio Gaytán, Salvador Rodríguez, Consuelo Banda, Pánfila Alfaro, Antonia Rodríguez, Luisa Silva y Cristina Martínez en contra de los señores Armando Garza González, Ramiro Arizpe Díaz, María Sanjuana Rocha



"de Garza y Rita Aya de Arizpe, en el presente Juicio  
"Ordinario Civil.- SEGUNDO.- Se declara procedente la  
acción de Reivindicación y entrega del inmueble pro--  
"movida por los señores Armando Garza González, Rami--  
"ro Arizpe Díaz, María Sanjuana Rocha de Garza y Rita  
"Ayala de Arizpe en contra de los señores Tiburcio -  
"Silva, Teresa Ortiz Rivera, Gregoria Martínez, Anto--  
"nio Gaytán, Salvador Rodríguez, Consuelo Banda, Pán--  
"fila Alfaro, Antonia Rodríguez, Luisa Silva y Cris--  
"tina Martínez, en consecuencia:- TERCERA.- Se condena  
"a los señores Tiburcio Silva, Teresa Ortiz Rivera, -  
"Gregoria Martínez, Antonio Gaytán, Salvador Rodríguez,  
"Consuelo Banda, Pánfila Alfaro, Antonia Rodríguez, -  
"Luisa Silva y Cristina Martínez a desocupar y entro--  
"gar a los señores Armando Garza González, Ramiro --  
"Arizpe Díaz, María Sanjuana Rocha de Garza y Rita -  
"Ayala de Arizpe, el inmueble que vienen ocupando --  
"cuya ubicación, medidas y colindancias han quedado  
"debidamente señaladas en esta propia sentencia, den--  
"tro del término de cinco días a partir de la fecha -  
"en que tome ejecutoria la presente resolución.- --  
"CUARTO.- No habiéndose comprobado los daños y per--  
"juicios que se reclaman por los demandados en su --  
"contrademanda, se absuelve a los actores de esta --  
"declaración.- QUINTO.- Se declaran improcedentes las  
"excepciones opuestas por los actores con motivo de  
"la contrademanda propuesta en su contra por los de--  
"mandados, por los motivos expuestos en los conside--  
"randos relativos de esta resolución.- SEXTO.- Se -  
"condena a los actores a pagar a los demandados, los

"gastos y costas judiciales del presente Juicio.- ---

"SEPTIMO.- Notifíquese".

SEGUNDO.- Inconformes los actores Tiburcio Silva, Terosa Ortiz Rivera, Gregoria Martínez, Antonio Gaytán, Salvador Rodríguez, Consuelo Banda, Pánfila Alfaro, Antonia Rodríguez, Luisa Silva y Cristina Martínez, con ese fallo, interpusieron apelación y, sustanciado el recurso, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, -- el día nueve de junio de mil novecientos sesenta y -- dos, pronunció sentencia confirmando la de primer grado, y condenando a los apelantes al pago de las costas causadas en ambas instancias. Es la que constituye -- el acto reclamado.

TERCERO.- La demanda de amparo, presentada -- en tiempo, se admitió el día nueve de octubre de mil novecientos sesenta y dos. La autoridad responsable rindió su informe justificado. El Ministerio Público se abstuvo de intervenir por carecer el negocio de -- interés público. El negocio se turnó al Ministro relator por auto de cuatro de diciembre del mismo año -- (1962). Se recibieron escritos del representante común de los quejosos los días veintidós de enero, diecinueve y veintiocho de marzo, y dieciocho de junio de mil novecientos sesenta y tres, en los que solicita -- se dicte la resolución pendiente. Mediante ejecutoria pronunciada el treinta y uno de julio de mil novecientos sesenta y tres, esta Tercera Sala de la Suprema -- Corte de Justicia se declaró incompetente para conocer de la demanda, por considerar que se contenían conceptos de violaciones sustanciales cometidas durante la --



D. 6481/62/1a

(34)

secuela del procedimiento, y acordó remitir los autos al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila, el cual la admitió, tramitó y falló el juicio, por ejecutoria de veintidós de enero del presente año (1964), sobrescribiéndolo, y devolvió el expediente a este Tribunal para que resolviera lo concerniente a las violaciones de fondo alegadas. Por auto de veintinueve de febrero siguiente, se turnaron nuevamente los autos a esta Tercera Sala, en virtud de que ya se había admitido la demanda, y el Ministerio Público formulado su pedimento. El negocio se turnó nuevamente al Ministro relator por auto de primero de abril del presente año (1964). Se recibieron escritos del representante legal de la parte quejosa, los días catorce de mayo, dieciséis y veintinueve de julio del mismo año, en los que solicita se dicto la resolución pendiente y exhibe una copia simple de la ejecutoria pronunciada en el amparo directo número 6375/62. También se recibió escrito del tercero perjudicado Ramiro Arizpe Díaz, el veintidós de julio del mismo año, en el que autoriza al licenciado Santiago Oñate para oír notificaciones. Asimismo se recibió escrito del quejoso Salvador Rodríguez, en quince de septiembre siguiente, con el cual exhibe copia certificada expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, N. L.

## CONSIDERANDO:

PRIMERO.— La existencia del acto reclamado se encuentra acreditada con el informe de la autoridad responsable y los autos originales de ambas instancias, que remitió.

SEGUNDO.- Los conceptos de violación en cuanto al fondo, que formulan los quejosos, en concreto, son como sigue:

I.- La autoridad responsable no estudió los agravios en los cuales se adujo la indebida valoración de las pruebas testimonial, de inspección judicial, documental y confesional, que ofrecieron los actores y ahora quejosos. También erróneamente consideró, que los documentos invocados en el quinto -- agravio no se ofrecieron como prueba, ya que en la -- demanda y en la contestación a la reconvencción, claramente se pidió que se tuvieran como pruebas: a).- El Decreto de catorce de octubre de mil novecientos cuarenta y uno; b).- El convenio de veintiséis de abril de mil novecientos cincuenta; y, c).- El certificado expedido por el Juez Auxiliar de la Sección 138-C. -- Tampoco estudió el sexto agravio, en el cual se alegó que el Juez no había tomado en cuenta la copia certificada de una querella, con la cual se pretendió demostrar la indebida conducta procesal de los reconvinientes. Igualmente omitió estudiar los demás agravios, pues sin referirse concretamente a cada uno de ellos, se concretó a hacer afirmaciones generales.

II.- La autoridad responsable privó de valor a la prueba testimonial que rindieron los actores, -- consistentes en las declaraciones de [REDACTED] --

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] --  
[REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED]

porque: a).- Los testigos tenían interés en el negocio, por estar poseyendo otros inmuebles como los actores; b).- El testigo [REDACTED] al responder la -



tercera pregunta, afirmó, que como a él le dieron -- posesión primeramente, le interesaba saber si era -- cierto que andaban dando posesiones; lo que significaba que tenía interés directo en el negocio; c).-

El testigo [REDACTED] no dió razón fundada de su dicho, pues afirmó que lo que había declarado lo conoció por conducta del actor Salvador Rodríguez; d).- El testigo [REDACTED] no dió razón fundada de su dicho, y al responder la repregunta número veintitrés, relativa a la primera directa, afirmó que el Comité Colonizador no funcionó. Su consideración es incorrecta porque no es exacto que -- los testigos, por ser también poseedores, tuvieran -- interés en el juicio, ya que no se demostró que la -- posesión de esos testigos se relacionara con el juicio, ni que tuvieran un interés económico. Por otro lado, los testigos [REDACTED] por ser vecinos de los demandantes, se encontraban en aptitud de declarar a ciencia cierta, como recibieron aquellos la posesión del Comité Colonizador de Monterrey. De consiguiente, la responsabilidad [REDACTED] el artículo 341 fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles, y el criterio de la Suprema Corte de Justicia, sustentado en la ejecutoria que aparece publicada en la página 698, del Tomo -- LXII, del Semanario Judicial de la Federación, relativo a que el interés que invalida a un testimonio, -- lo es el económico. No es exacto que el testigo [REDACTED] [REDACTED], al responder la repregunta catorce, relativa a la directa número tres, hubiera reconocido tener -- interés en el litigio, pues lo que afirmó fué que se

había enterado de que el Comité les dió posesión a los actores, porque a él también le habían dado posesión, y que quiso saber si las posesiones que andaban entrogando eran correctas; por ello, la responsable debió estudiar íntegramente la declaración de dicho testigo. Por otro lado, el Juez privó de eficacia a dichos testimonios únicamente porque los testigos eran posesorios (sic), y sin embargo, el tribunal responsable no se concreta a estudiar esa consideración del Juez. Por lo que ve al testimonio de [REDACTED], es inexacto que dicho testigo hubiera afirmado que conoció los hechos por conducto de Salvador Rodríguez, pues lo que sostuvo fué, que desde mil novecientos cuarenta funcionó el Comité Colonizador; que estuvo presente cuando dicho Comité entregó la posesión a los actores, lo cual le constaba porque lo vió. Por último, el testigo [REDACTED] sí dió razón fundada de su dicho, y afirmó que el Comité Colonizador funcionó. Pero, aún admitiendo que esos testimonios carecieron de valor, los de [REDACTED] y [REDACTED], por no haberse objetado, tienen eficacia plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 397 y 398 del Código de Procedimientos Civiles.

III.- La autoridad responsable consideró, -- que la inspección ocular practicada sobre los inmuebles disputados, únicamente tuvo por objeto dar fé -- de ciertos hechos, pero que de ella no se pudieron -- obtener conclusiones. Su consideración, es incorrecta, porque aparte de que la Ley la establece como --- prueba, con ella se puede determinar la naturaleza y





298

antigüedad del bien inspeccionado. Como aconteció - en la especie, en que se dió fe del enclavamiento antiguo de tejabanos, lo cual confirman las fotografías exhibidas, que también acreditan la antigüedad de las mejoras existentes en el predio. Entonces como la responsable no concedió valor alguno a esas pruebas, violó los artículos 394 y 404 del Código Procesal.

IV.- La autoridad responsable privó de valor a las pruebas documentales invocadas en el tercer agravio, aduciendo que presentaban testaduras, alteraciones, enmendaduras y otras cosas parecidas, y que en ellas aparecían domicilios diferentes de los que tenían los actores, ya que se consignaban en números nones. Su consideración es errónea, porque en la diligencia de inspección ocular, se dió fe de que Salvador Rodríguez habitaba la casa número [REDACTED] de la calle [REDACTED] y que Luisa Silva vivía en un casito construido dentro del terreno [REDACTED] y por tanto, es inexacto que los domicilios consignados en las cartas exhibidas como prueba, no coincidieron con los que habitaban los actores. Tampoco es exacto que en las cartas se consignaran números nones, pues la remitida a Salvador Rodríguez es par, y respecto de la enviada a Luisa Silva, se advierte que su domicilio no tiene número oficial, por ser una colonia apartada de la ciudad, en la cual cada colono pone el número que desea a la finca que habita. Por otro lado, las cartas no presentan enmendaduras ni alteraciones, y su aspecto antiguo confirma su autenticidad. Así, la responsable infringió los artículos 386 y 390 del Código Procesal.

V.- Al estudiar el cuarto agravio, la autoridad responsable considera que los actores no tienen ningún documento que les dé derecho a poseer. - Su consideración es incorrecta, porque los términos documento y título son diferentes y si bien carecen de documento, en cambio sí tienen título, que lo constituye la entrega que de la posesión les hizo el Comité colonizador en concepto de propietarios. Además, la responsable no hizo una debida valoración de la confesión que produjeron los actores, violando así los artículos 377, 382 y 383 del Código de Procedimientos Civiles.

VI.- La autoridad responsable privó de valor a la certificación expedida por el Juez Auxiliar de la Sección 138-C, al Decreto Presidencial de fecha dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y uno, y al convenio de veintiséis de abril de mil novecientos cincuenta, celebrado entre la Secretaría de Bienes Nacionales, los Ferrocarriles Nacionales de México y el Gobierno del Estado de Nuevo León, arguyendo que no se ofrecieron como prueba durante el término probatorio. Su consideración es incorrecta, porque el Decreto y convenio mencionados, se exhibieron con la demanda, y se pidió que se tuvieran como pruebas, y la certificación se exhibió con la contestación a la reconvención, para que también se tuviera como prueba, e incluso, en escrito de fecha primero de diciembre de mil novecientos sesenta y uno, nuevamente se pidió que se tuvieran como pruebas las documentales exhibidas con la demanda y con el escrito de contestación a la reconvención. La --



responsable, agrega, que la certificación del Juez --  
Auxiliar carece de valor, porque no fue ratificado,  
ni certificado por otra autoridad Superior, y que di-  
cho Juez nunca tuvo jurisdicción dentro de la super-  
ficie en donde se localiza el terreno disputado. Su  
consideración es errónea, porque el Juez Auxiliar sí  
tenía derecho para expedir certificaciones, de con-  
formidad con lo dispuesto por el artículo 7o. del --  
Reglamento de Jueces Auxiliares de Monterrey, aparte  
de que, por ser un documento público, a tenor del --  
artículo 304 fracción II, del Código Procesal, no --  
era necesario que se ratificara. En cambio, el Ofi-  
cial Mayor del Ayuntamiento de Monterrey, sí carecía  
de derecho para expedir la certificación a que se --  
refiere la responsable, por ser un empleado adminis-  
trativo, pues el único facultado para expedir certi-  
ficaciones relativas a las personas que tenían el ca-  
rácter de Jueces Auxiliares, lo era el Presidente --  
Municipal. Además, el Oficial Mayor no señaló el --  
archivo de donde tomó los datos que fundaron su cer-  
tificación, ni acompañó el plano sobre las demarcacio-  
nes de los Jueces. Consecuentemente, la responsable  
violó los artículos 304 fracción II y 377 del Código  
de Procedimientos Civiles. También privó de valor --  
al decreto y convenio mencionados, a pesar de que el  
primero es una ley, y el segundo contiene un acto --  
celebrado entre entidades públicas. Entonces, la --  
responsable debió considerar justificada la existen-  
cia de un movimiento colonizador, en el sector norte  
de Monterrey, respecto de terrenos pertenecientes a  
los Ferrocarriles Nacionales de México, a virtud de --

cuyos actos, los ahora quejosos recibieron los terrenos que poseen.

VII.- La autoridad responsable privó de valor a la copia certificada de una querella, que obra a fojas 225, la cual originó el proceso número ---- 279/961, a la denuncia penal de fecha trece de febrero de mil novecientos sesenta y uno, formulada con motivo de la sustracción de documentos imputada a los reconvinientes, y a la denuncia formulada por Teresa Ortiz Rivera, por el delito de amenazas, arguyendo que tales documentos fueron objetados de falsedad, y que además, los ahora quejosos fueron acusados del delito de despojo. Como se ve, la responsable no estudió el agravio, en el cual se adujo que los documentos mencionados demostraban la indebida conducta procesal de los reconvinientes. Por otro lado, tales documentos tienen valor pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 604, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, por ser públicos, y acreditan la conducta procesal arbitraria y maliciosa de los reconvinientes, sin que obste que Ramiro Arizpe los hubiera acusado de despojo, puesto que tal delito no se demostró, amén de que, en la denuncia falsamente se sostuvo, que la posesión de los ahora quejosos tenía una antigüedad de tres años.

VIII.- La autoridad responsable no estudió el séptimo agravio, en el cual se alegó que el Juez no había apreciado correctamente las presunciones legales, derivadas de los artículos 798 y 807 del Código Civil, pues se concretó a afirmar que el Inferior -- estudió correctamente todas las pruebas rendidas en --



el juicio. Tampoco tomó en cuenta, que los reconvientes tenían la carga de probar que la posesión de los actores era precaria; y que la escritura de aquellos era posterior a la posesión. Desconoció asimismo el criterio de la Suprema Corte de Justicia, sustentado en varias ejecutorias, relativo a que al poseedor no le corresponde probar que su posesión ha sido en concepto de dueño, puesto que el artículo 798 del Código Civil previene, que toda posesión se presume, salvo prueba en contrario, a título de dueño; y que por tanto, es al contrario a quien compete demostrar que el poseedor tenía un título precario.

IX.- La autoridad responsable tampoco estudió el octavo agravio, ni valora las pruebas conjuntamente, relacionándose entre sí, e ignora que de tales probanzas aparece, que los ahora quejosos recibieron la posesión de sus terrenos en concepto de dueños, del Comité Colonizador de Monterrey, y que a esos predios les han hecho mejoras y los poseen desde mil novecientos cuarenta, en forma pacífica, continua y pública, operando así la prescripción adquisitiva, aún considerando de mala fé esa posesión. Consecuentemente infringe los artículos 1132, 1148, 1149 y 1153 del Código Civil, 366, 390, 394, 398, 419 y 420 del Código de Procedimientos Civiles.

X.- La autoridad responsable tampoco estudió los agravios noveno y décimo, en los cuales se alegó a).- Para que opere la prescripción no se necesita título; b).- El título no se acredita únicamente mediante la exhibición de un documento; c).- El Comité Co-

lonizador de Monterrey existió y funcionó; d).- La entrega de las posesiones que dicho Comité hizo a los actores, genera derechos a favor de éstos; y e).- Dichas posesiones las disfrutaban los ahora quejosos, en concepto de dueños, pacífica, continua y públicamente. Pues se concretó a afirmar que se remitía a lo que ya había expresado. También indebidamente considera, que el concepto de dueño solo puede demostrarse con un documento escrito, y no mediante una prueba testimonial; pues siendo la posesión un hecho, no necesariamente puede acreditarse con un documento escrito, de lo contrario, nunca operaría la prescripción positiva a que se refieren los artículos 1148 y 1149 del Código Civil. Además, en el Estado de Nuevo León prevalece un criterio distinto del de las demás Legislaciones de los Estados, pues en el artículo 1148 fracción I, del Código Civil, se establece, que para que opere la prescripción, se requiere que se posea en concepto de dueño, lo cual sí puede justificarse mediante prueba testimonial. De consiguiente, al negar la responsable idoneidad a la prueba de testigos, violó los artículos 1148 y 1149 del Código Civil, 342, 397 y 398 del Código Procesal. Así pues, es inexacto que para adquirir la propiedad por prescripción, sea necesario un documento escrito, ya que, incluso, por medio de delito puede adquirirse. Además, el artículo 2915 del Código Civil, autoriza a ejercitar la acción correspondiente, a quien posee inmuebles con las condiciones necesarias para prescribir, pero que no tiene título. La Suprema Corte de Justicia también ha reconocido que el Código Civil de



- 19 -

D. 6481/62/1a

(34)

Nuevo León, en materia de prescripción positiva, establece un sistema en el cual no se requiere título, sino solamente que la posesión se disfrute en concepto de dueño, según es de verse en la ejecutoria pronunciada en el amparo directo número 4466/951, promovido por Ponciano Yáñez Degollado. La responsable también ignora, que a los reconvinientes correspondía demostrar que la posesión que disfrutaban los actores era precaria, por tener éstos a su favor la presunción que establecen los artículos 798 y 807 del Código Civil. Asimismo no tomó en cuenta que el Decreto Presidencial de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y uno, el convenio de fecha veintiséis de abril de mil novecientos cincuenta celebrado entre la Secretaría de Fines Nacionales, el Gobierno del Estado y los Ferrocarriles Nacionales de México, y los testimonios de [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED] demostraron la existencia de un Comité Colonizador, que hizo entrega de terreros (lo cual, por ser un hecho notorio, no necesitaba demostrarse); y que esa entrega la hizo a los ahora quejosos en concepto de dueños, los cuales siguieron disfrutando en forma pacífica, continua y pública, realizando incluso actos de dominio. Y si el inmueble ahora se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en favor de los reconvinientes, esto no impidió que los ahora quejosos lo poseyeran anteriormente.

XI.- La autoridad responsable no toma en cuenta, que si los reivindicantes consideraron a los

ahora quejosos, como inquilinos, la reivindicatoria no era la acción procedente, sino la personal derivada del contrato respectivo.

XIII.- La condena en costas es ilegal, porque siendo procedente la acción de prescripción positiva, e improcedente la reivindicatoria, tal condena debió ser a cargo de los reconvinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 90, 91 y 92 del Código de Procedimientos Civiles. Pero, además, como hubo condena parcial, la autoridad responsable antes de establecerla, debió resolver cuál de las partes había obrado con temeridad o malicia, teniendo en cuenta que sólo los actores rindieron pruebas.

XIII.- Como la sentencia reclamada no está debidamente fundada, su ejecución a cargo del Juez Segundo de Letras de lo Civil de Monterrey y Registrador Público de la Propiedad de esa población, también lo es.

TERCERO.- Las consideraciones fundatorias de la sentencia reclamada, dicen así: 1.- En el primer agravio, la apelante invoca la violación de los artículos 404, 419 y 420 del Código de Procedimientos Civiles, porque el Inferior no hizo una correcta valoración de la prueba testimonial que rindió. El agravio es improcedente, ya que el Juez, aplicando el artículo 342 fracción VII, del Código Procesal, correctamente privó de valor a dicha prueba, considerando que los testigos son tachables, por tener interés en el juicio, en virtud de estar poseyendo otros lotes. En efecto, el testigo [REDACTED]





Forma A-55  
212

■, al responder la repregunta decimacuarta, relativa a la directa número tres, afirmó: "que como al -- "testigo le dieran primero que a ellos, a él lo inte -- "resaba saber si era cierto que andaban dando posesio -- "nes", lo que demuestra implícitamente su interés -- en favorecer a los actores. El testigo ■ ■ ■ ■ ■ afirmó, que lo que declaró, lo supo por -- que Salvador Rodríguez se lo dijo, aparte de que no -- dió razón de la existencia del Comité Colonizador. -- Por su parte, el testigo ■ ■ ■ ■ ■, al res -- ponder la primera pregunta y la repregunta séptima, -- relativa a la directa número seis, tampoco dió razón -- fundada de la existencia de dicho Comité, puesto que -- no señaló a las personas que lo integraban, ni indicó -- el lugar en donde funcionó y al responder la re -- pregunta veintitrés, relativa a la directa número -- uno, afirmó que el ■ ■ ■ ■ ■ Comité Colonizador no -- funcionó, ni tampoco expuso la razón de su dicho. -- El Inferior no ■ ■ ■ ■ ■ los artículos 826, 1148 y 1149 del -- Código Civil, 342, 397 y 398 del Código de Procedi -- mientos Civiles, porque de acuerdo con dichos precep -- tos, la única posesión apta para prescribir, es la -- que se funda en un título traslativo de dominio, que -- es la causa generadora de esa posesión, sin que sea -- suficiente la mera estimación subjetiva del poseedor, -- de que disfruta esa posesión en concepto de propieta -- rio. Este criterio lo ha mantenido la Suprema Corte -- de Justicia en varias ejecutorias. Tampoco la prue -- ba testimonial demuestra la existencia del Comité -- colonizador de Monterrey, ni menos que dicho Comité

fuera propietario del inmueble disputado, y así no --  
pudo transmitir su dominio, de acuerdo con el artículo  
831 del Código Civil, que previene, que la propiedad  
no puede ser ocupada en contra de la voluntad de su -  
dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante  
indemnización. Además, como los actores afirmaron en  
su demanda, que el terreno que poseían se los entregó  
en propiedad el Comité Colonizador de Monterrey, es -  
evidente que originalmente no disfrutaron la posesión  
por su propio derecho, sino a través de dicho Comité. \*

2.- El segundo agravio es improcedente, porque no se  
violan las disposiciones legales que se invocan, pues \*  
el Juez hizo una correcta valoración de la prueba de  
inspección ocular ofrecida por ambas partes, conside-  
rando que dicha prueba demostró que los actores ocupa-  
ban parcialmente el terreno en cuestión, pero no que  
lo poseían, puesto que esa prueba solo tenía por obje-  
to dar fe de hechos ocurridos en cierto momento, sien-  
do así inepta para demostrar la posesión. 3.- El ter-  
cer agravio es improcedente, puesto que no se infrin-  
gen los artículos 367 y 390 del Código Procesal, pues \*  
el Juez valoró correctamente los documentos que ofre-  
ció la apelante, desestimándolos, no precisamente por  
haberse impugnado de falsos, sino porque se advierte  
claramente que presentan testaduras, alteraciones, -  
enmendaduras y otras cosas parecidas, y se asientan .  
en ellos domicilios distintos de los que tienen los .  
actores, pues en algunos se consignan números nones.

4.- El cuarto agravio igualmente es improcedente, ya  
que el Inferior valoró correctamente la confesión que



213

produjeron los actores, en la cual admitieron que ocupan el terreno en cuestión sin tener documento alguno que la funde, aparte de que dicha confesión la confirma la prueba testimonial que rindieron los propios actores. 5.- El quinto agravio también es improcedente, porque no se violaron los artículos 387, 404, 419 y 420 del Código Civil, pues a pesar de que la actora no ofreció dentro del término probatorio las pruebas documentales a que se refiere el agravio, sin embargo, el Juez las estudió. Ahora bien, tales pruebas carecen de valor, porque el certificado expedido por el Juez Auxiliar de la Sección 138 C., con el cual se pretendió acreditar la antigüedad de la posesión, no se ratificó, ni se encuentra certificada la firma que contiene, por una Autoridad Superior, pues de acuerdo con el artículo 304 del Código de Procedimientos Civiles, no es un documento público; amén de que la demandada impugnó el documento, y demostró con la certificación del Oficial Mayor del Ayuntamiento de Monterrey, que el Juez que expidió aquel certificado, no tenía competencia en el lugar en donde se localiza el inmueble disputado. El Decreto de fecha catorce de octubre de mil novecientos cuarenta y uno, y el convenio celebrado el veintiséis de abril de mil novecientos cincuenta, carecen de valor, y no se relacionan con el juicio, porque de ellos no aparece que se hubiera autorizado al Comité Colonizador de Monterrey para entregar a los actores y apelantes el terreno localizado en la calle [REDACTED] entre las calles de [REDACTED] y [REDACTED].

██████, de la Colonia ██████, ni demuestran la causa legítima, necesaria y generadora de la posesión. 6.- El sexto agravio es improcedente, porque no se viola el artículo 401 del Código Procesal, ya que el documento que se invoca carece de valor, por haberse objetado de falso. Además, los actores y apelantes fueron acusados del delito de despojo y otros, según se desprende de la copia certificada que obra en autos, lo cual acredita la inconformidad de los demandados con la conducta de los actores. 7.- Es improcedente el séptimo agravio, ya que no se infringen los artículos 798 y 807 del Código Civil, pues el Juez hizo una correcta valoración de todas las pruebas que se ofrecieron en el juicio. 8.- El octavo agravio también es improcedente, porque el Juez estudió las pruebas ofrecidas por la actora, y correctamente concluyó, que no demostró su acción de prescripción adquisitiva, y que en cambio, los demandados sí acreditaron la acción reivindicatoria. 9.- Es improcedente asimismo el noveno agravio, porque el Juez interpretó correctamente las disposiciones legales que se invocan, de acuerdo con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia, en varias ejecutorias. 10.- Los agravios décimo y décimo segundo, también son improcedentes, por las razones expuestas.

CUARTO.- El estudio del segundo concepto de violación merece preferencia, por ser preponderante la cuestión que plantea. Es infundado por las siguientes consideraciones. El artículo 826 del Código Civil previene, que solo la posesión que se adquiere en concepto de dueño de la cosa poseída, puede producir la pres-



D. 6481/62/1a

(34)

cripción. Así el concepto de propietario es un elemento indispensable para prescribir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1148 fracción I, del Código Civil, y por tanto debe demostrarse, revelando cuál fué la causa generadora de la posesión, pues para usucapir, es imprescindible señalar el hecho o el acto que la originó y cuándo ocurrió, a fin de que sea posible determinar la naturaleza de dicha posesión, o sea si es originaria o derivada, de buena o mala fe, y cuál deba ser el tiempo de su duración para que se consuma la prescripción positiva. Además, es necesario acreditar el hecho o el acto en que se afirme que consistió la causa generadora de la posesión, tal como una enajenación, una donación, una herencia, o cualquier otro medio de adquirir, aún delictuoso, como robo o despojo, y no el de una mera tenencia o disfrute de la cosa, que obedezca a una relación de arrendamiento, comodato, depósito o prenda. Ciertamente, el artículo 798 del Código Civil dispone que la posesión da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales, pero esto, jurídicamente debe interpretarse, en el sentido de que la posesión produce la presunción de propiedad, porque es la manifestación del ejercicio del dominio, presunción que es *juris tantum*, o sea que admite prueba en contrario, y así debe tenerse como cierta, sólo mientras no se demuestre lo contrario, esto es, que quien la tiene a su favor, no es el propietario, por no ser un poseedor originario, sino derivado o mero detentador. Ahora bien, en la

especie, los actores Tiburcio Silva, Teresa Ortiz --  
Rivera, Gregoria Martínez, Antonio Gaytán, Salvador  
Rodríguez, Consuelo Banda, Pánfila Alfaro, Antonia  
Rodríguez, Luisa Silva y Cristina Martínez, en su --  
demanda manifestaron que un Comité Colonizador de --  
terrenos baldíos y de predios que pertenecieron a --  
las Líneas Férreas de México, S. A. de C. V., expro-  
piadas en el año de mil novecientos treinta y siete,  
les entregó la posesión del inmueble cuestionado, a  
principios del año de mil novecientos cuarenta, (he-  
chos primero y segundo), pero no señalaron cuál fue  
el hecho, ni el acto jurídico, que originó esa entre-  
ga; es decir, si se trató de una enajenación, de una  
donación, etc., lo cual era necesario, porque ello -  
constituía uno de los elementos de la acción ejerci-  
tada, que debió precisarse en el momento de fijar la  
litis, pues solo los hechos que la comprenden, serán  
objeto de prueba, durante el término respectivo. --  
Además, tampoco se demostró en el juicio ese elemen-  
to, pues los testigos presentados por los actores,  
únicamente afirmaron tener conocimiento de que dicho  
Comité les entregó el terreno, pero no, cuál fue la  
causa; no mencionaron el hecho o el acto jurídico --  
origen de la entrega. En efecto, el testigo [REDACTED]  
[REDACTED] al responder la pregunta especial que  
le formuló el Juez (fojas 98 vuelta), afirmó: "Que --  
"se los dió el Comité Colonizador de Monterrey"; y  
respondió la repregunta número veinte; relativa a la  
octava directa, diciendo que el Comité Colonizador --  
de Monterrey les dió a los actores ese terreno, para



- 27 -

D. 6481/62/1a.

(34)

que lo disfrutaran como dueños, y como razón de su -  
 dicho, agregó, que lo declarado le constaba porque -  
 lo había visto. [REDACTED], al responder -  
 la pregunta especial formulada por el Juzgado, afir-  
 mó que el Comité Colonizador entregó a los actores -  
 la posesión de los terrenos cuestionados, el cual --  
 habían venido poseyendo en concepto de dueños (res-  
 puesta a la pregunta octava), y como razón de su di-  
 cho dijo, que le constaba lo declarado porque pasaba  
 por ahí todos los días. [REDACTED], al -  
 responder también la pregunta especial formulada por  
 el Juzgado, afirmó que el Comité Colonizador de Mon-  
 terrey entregó la posesión a los actores, la cual dis-  
 frutaban en concepto de dueños (respuesta a la pre-  
 gunta octava), y que lo declarado le constaba, porque  
 lo había visto, y [REDACTED] al responder -  
 la repregunta número seis, relativa a la segunda  
 directa, afirmó que estuvo presente cuando el Comi-  
 té Colonizador le dió los terrenos a los actores, el  
 cual poseían en concepto de propietarios (respuesta  
 a la pregunta octava), y como razón de su dicho, afir-  
 mó, que lo declarado le constaba porque lo había -  
 visto. [REDACTED] al responder la re-  
 pregunta número diez, relativa a la primera directa,  
 afirmó que se enteró del funcionamiento del Comité -  
 Colonizador de Monterrey, porque vio cuando éste en-  
 entregó al terreno a los actores como dueños. Enton-  
 ces, esa prueba testimonial resultó ineficaz para de-  
 mostrar la causa generadora de la posesión de los --  
 actores, de conformidad con lo dispuesto por el ar-  
 tículo 398 fracción IV, del Código Procesal, ya que

no aparece que los testigos conocieron por sí mismos, algún hecho que se traduzca en algún acto jurídico determinante de la entrega de la cosa; sin que por otro lado se hubieran exhibido documentos probatorios al respecto. El certificado expedido por el Juez -- Auxiliar de la Sección número 138 C., del Municipio -- de Monterrey, que los actores exhibieron, y en el -- cual se hace constar, que éstos ocupan el inmueble -- disputado, en calidad de poseesionarios desde aproximadamente veinte años anteriores a mil novecientos sesenta, no hace referencia a algún acto traslativo de dominio que la generara. De consiguiente, la falta de comprobación de la causa generadora de la posesión, en concepto de propietario, fue por sí sola bastante para que no procediera la acción de prescripción positiva, lo cual fundamentalmente así <sup>deliberó</sup> consideró la -- autoridad responsable. Este criterio esencial lo -- mantuvo esta Suprema Corte de Justicia, en la ejecutoria pronunciada el veintisiete de agosto de mil -- novecientos sesenta y cuatro, en el amparo directo -- número 8956/61, promovido por María Rogino de Hernández, contra el acto de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

QUINTO.- Resulta inútil el estudio del primero <sup>segundo y tercero</sup> y del tercero, al ~~al~~ <sup>del</sup> ~~décimo~~ <sup>tercer</sup> conceptos de violación que se refieren a la indebida valoración de las pruebas siguientes: (a).- Inspección ocular del terreno cuestionado; b).- Documental consistente en el Decreto Presidencial de fecha dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y uno, convenio celebrado el veintiséis de abril de mil novecientos cincuenta





por la Secretaría de Bienes Nacionales, los Ferrocarriles Nacionales de México y el Gobierno del Estado de Nuevo León; c).- Confesión producida por los actores; d).- Copia certificada de varias actuaciones judiciales relativas al proceso número 279/961, y f).- De presunciones; y en que la autoridad responsable - no las valorizó conjuntamente, relacionándolas entre sí, puesto que de todas esas pruebas no se desprende algún acto jurídico determinante de la entrega de la posesión, es decir no se demuestra la ~~posesión~~ <sup>posesión</sup> generadora de esa posesión a que se alude en el considerando que antecede.

SEXTO.- Es infundada el décimo primer concepto de violación, porque si bien los demandados Armando Garza González, ~~Maria~~ <sup>María</sup> Sanjuana Rocha de Garza, Ramiro Arizpe Díaz y Rita Ayala de Arizpe, en su escrito de contestación confesarán que los actores poseen el inmueble cuestionado como inquilinos, ya que lo recibieron de los anteriores propietarios del inmueble en arrendamiento, sin embargo, los demandados negaron ~~ese~~ <sup>ese</sup> carácter de arrendatarios, en su escrito de contestación a la reconvencción, y así, -- no ~~podían~~ <sup>podían</sup> ahora invocar ese hecho en su favor, amén de que no se rindió prueba alguna para demostrar la existencia de esa relación arrendaticia. En apoyo de lo asentado se invoca el criterio de esta Suprema Corte de Justicia, sustentado en la ejecutoria siguiente: "ACCION REIVINDICATORIA, PROCEDENCIA DE LA. -- Cuando el causante de la posesión de un poseedor de privado pretende exigir de éste o de sus causahabientes la devolución o entrega de la cosa poseída, --

"aquel no está legitimado para utilizar la acción --  
"real reivindicatoria, sino la acción personal corres-  
"pondiente derivada del vínculo jurídico que haya da-  
"do origen a la posesión y así, el arrendador no pue-  
"de reivindicar del arrendatario la cosa dada en al-  
"rendamiento, el depositante del depositario la cosa  
"dada en depósito, el comodante del comodatario la --  
"cosa dada en comodato y en general en todos aquellos  
"contratos o actos jurídicos en los que el poseedor -  
"debe restituir la cosa que ha recibido por virtud -  
"de los mismos. Sin embargo, cuando el poseedor de-  
"rivado niega tener posesión de esta naturaleza y --  
"afirma disfrutarla en concepto de propietario, y de  
"este modo niega el vínculo derivado de los contratos  
"de arrendamiento, depósito, comodato, etc., el pro-  
"prietario de la cosa poseída puede intentar contra el  
"poseedor la acción real reivindicatoria para que el  
"órgano jurisdiccional decida sobre el derecho de --  
"propiedad que en su favor alega el reivindicante, --  
"frente a idéntico derecho de propiedad que para sí -  
"reclama el poseedor". Amparo directo 2754/961/2a. -  
Manuel Botello Aguilar y Coag.- Resuelto el 14 de --  
junio de 1962. Unanimidad de cuatro votos.

SEPTIMO.- Es infundado el décimo segundo --  
concepto de violación. La condena de los actores al  
pago de los gastos y costas del juicio es consecuen-  
cia de la exacta aplicación de los artículos 92 y 94  
del Código de Procedimientos Civiles, ya que no obtu-  
vieron sentencia favorable en ninguna de las dos ins-  
tancias. Además, conforme a la tesis de jurisprudencia



217

cía número 306, que aparece publicada en la página - 575 del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, debe ser condenado en costas, el que pierda el litigio en ambas instancias.

De lo anterior resulta, que la sentencia reclamada no es violatoria de los artículos 14 y 16 -- constitucionales, por no infringir las disposiciones de la Ley Secundaria invocada, y debe negarse el amparo.

Por lo expuesto y con apoyo ~~además~~ en los artículos 103-I y 107-I, II, III y V de la Constitución General, 45, 158 y 190 de la Ley Orgánica de -- los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y 26-III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la -- Federación, se resuelve:

UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara -- ni protege a Salvador Rodríguez, Tiburcio Silva, Teresa Ortiz Rivera, Gregoria Martínez, Antonio Gaytán, Consuelo Banda, Pánfila Alfaro, Antonia Rodríguez, -- Luisa Silva y Cristina Martínez, contra los actos -- que reclamaron de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, Juez Segundo de Letras de Monterrey, Nuevo León y Encargado del Registro Público de la Propiedad de dicha población, -- asistentes, respectivamente, en la sentencia definitiva dictada el nueve de junio de mil novecientos -- sesenta y dos, en el toca a la apelación del juicio -- ordinario, que siguieron a Ramiro Arizpe, Armando -- Garza González, María Sanjuana Rocha de Garza y Rita Ayala de Arizpe; y en su ejecución.

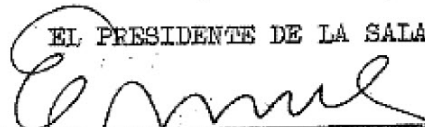
anv.

Notifíquese, publíquese, con testimonio de -  
esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad  
responsable y, en su oportunidad, archívese el expo-  
diente.


Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema  
Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco  
votos, habiendo sido relator el C. Ministro Lic. Mariano  
Ramírez Vázquez.

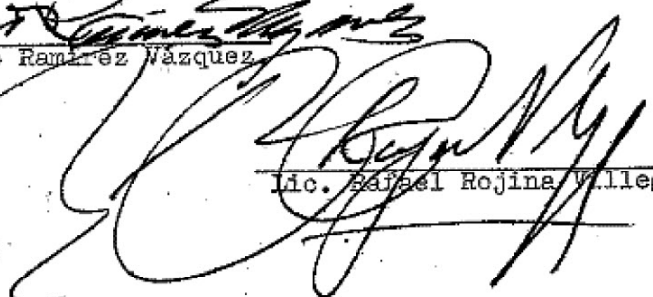
Firman los CC. Presidente y Ministros que la in-  
tegran con el Secretario que autoriza, y da fe.

EL PRESIDENTE DE LA SALA

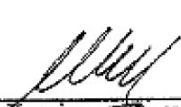
  
Lic. Enrique Martínez Ulloa.

LOS MINISTROS:

  
Lic. Mariano Ramírez Vázquez.

  
Lic. Rafael Rojina Villegas.

  
Lic. José Castro Estrada.

  
Lic. Mariano Azuela.

EL SRIO. DE ACUERDOS DE LA SALA

  
Lic. Ángel Morales Moreno.

En 15 NOV. 1965 por lista de la misma  
fecha, se firmó la presente a los intere-  
sados y al Ministerio Público Federal.

